

DOCUMENTACIÓN

I. AS NOSAS LEIS

TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GALLEGA. EXÉGESIS DE LA LEY 4/2006, DE 30 DE JUNIO.

MARCOS ALMEIDA CERREDA

Profesor contratado interino de la Universidad de Santiago de Compostela

1.- INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, tarea que los artículos 9.2 de la Constitución Española y 4.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia encomiendan a los Poderes Públicos, el Parlamento de Galicia, a instancias del Gobierno Autonómico, en uso de las competencias que le confiere el artículo 28.1 del Estatuto de Autonomía de Galicia -el cual, dentro del marco fijado por el artículo 149.1.18 y 149.3 de la Constitución Española, atribuye a la Comunidad Autónoma de Galicia la competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en materia de régimen jurídico de la Administración Pública gallega y de régimen estatutario de su funcionariado- ha aprobado la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración Pública gallega.

En esta Ley se recogen una serie de medidas que, incidiendo en diferentes ámbitos de la actuación de los Entes Públicos, tienen como común denominador el insertar en nues-

tro sistema el principio de transparencia, como criterio orientador de la actividad de las Administraciones Públicas.

En la medida en que una opinión pública informada contribuye a definir y realizar acciones públicas auténticamente serviciales al interés general y que esa misma opinión pública informada lleva a cabo una eficaz vigilancia sobre la acción de los poderes públicos, reduciendo, de este modo, el riesgo de la existencia de actuaciones desviadas del interés general, la aprobación de la Ley 4/2006 constituye, sin duda alguna, una intervención legislativa especialmente oportuna, ya que nos encontramos en un momento histórico en el que el incremento de la complejidad en la actuación de las Administraciones Públicas ha alcanzado unas cotas muy elevadas y en el que, en consecuencia, para posibilitar la participación en la gestión de los asuntos y el control de los mismos por la ciudadanía, surge la necesidad de ofrecer a la Sociedad nuevos cauces de participación, nuevos sistemas de información y, en definitiva, nuevos mecanismos de control, que le permitan desempeñar un papel significativo en la garantía del cumplimiento de la legalidad, la oportunidad, la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de las Administraciones Públicas.

Además, directamente relacionado con el objetivo último que persigue el principio de transparencia, que es garantizar el derecho a los ciudadanos a una buena administración, en la Ley 4/2006 se incluye un código de buenas prácticas administrativas para que los profesionales al servicio de la Administración Autonómica tengan un referente claro en cuanto a principios éticos y de conducta a seguir en sus actuaciones.

2.- LA TRANSPARENCIA EN LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GALLEGA

2.1.- El ámbito de aplicación de las disposiciones sobre la transparencia administrativa

El artículo 1 de la Ley 4/2006, respecto de las previsiones sobre transparencia administrativa contenidas en dicha Ley, establece dos tipos de sujeción -total o limitada- por parte de los sujetos que desarrollan actividades de naturaleza pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Así, en primer lugar, de acuerdo con este artículo 1, han de sujetarse a dichas previsiones: a) La Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia; b) Los Organismos Autónomos, Sociedades Públicas, Fundaciones del Sector Público Autonómico y demás Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la Comunidad Autónoma de Galicia; c) Los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia que, careciendo de personalidad jurídica, no estén formalmente integrados en la Administración de la Comunidad Autónoma, y d) Los Entes y Empresas partici-

padas mayoritariamente por la Xunta de Galicia a que hace referencia la Ley 10/1996, de 5 de noviembre ¹.

En segundo lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2, los concesionarios de servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia se sujetarán exclusivamente a lo dispuesto en el artículo 12.

2.2.- Los principios generales en materia de transparencia administrativa

Las Entidades que, de acuerdo con lo dicho antes, han de sujetarse totalmente a las previsiones sobre transparencia administrativa contenidas en la Ley 4/2006 y el personal a su servicio están obligadas a respetar y perseguir en el desarrollo de sus respectivas actividades los siguientes principios:

- a) Procurar la satisfacción del interés general en la toma de decisiones.
- b) Garantizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la organización y en la gestión pública.
- c) Proporcionar y difundir información constante, veraz, objetiva y clara sobre la actuación del Sector Público Autonómico.
- d) Potenciar su accesibilidad y receptividad al objeto de facilitar el conocimiento por parte de la ciudadanía de las informaciones y gestiones que resulten de su interés.
- e) Fomentar y favorecer la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y en el diseño y mejora de los servicios públicos. En particular, estas Entidades han de fomentar la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los asuntos públicos.

¹ El artículo 1 de esta Ley establece: "En los términos regulados en los artículos siguientes, habrán de ajustar su actuación en materia de personal y contratación a los principios básicos que regulan la función pública y contratación de las Administraciones Públicas:

- a) Las entidades de derecho público vinculadas a la Administración de la Comunidad Autónoma o dependientes de la misma.
- b) Las fundaciones constituidas mayoritariamente o en su totalidad por aportaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, por sus organismos autónomos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes o cuyos ingresos provengan mayoritariamente de subvenciones con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, siempre que en este último caso la Comunidad Autónoma forme parte de sus órganos de gobierno o dirección.
- c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital exista participación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad Autónoma, de sus organismos autónomos y de las demás entidades de derecho público".

f) Mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas de los diferentes colectivos de ciudadanos y con la sociedad civil.

g) Garantizar en sus relaciones con la ciudadanía el principio de no discriminación por razón de género, raza, religión o creencia, ideología, capacidad física o psicológica, o cualesquiera otras circunstancias de índole personal o social. Especialmente, las citadas Entidades han de perseguir la eliminación absoluta de cualquier discriminación, directa o indirecta.

h) Hacer efectivos los principios de racionalidad, claridad y confianza legítima en la relación de la Administración con los ciudadanos.

i) Impulsar el empleo de las técnicas informáticas y telemáticas para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias.

j) Promover el uso normal del gallego, oralmente o por escrito, en las relaciones con la ciudadanía, sin perjuicio del derecho a la no discriminación por razón de la lengua.

k) Prestar especial atención a las necesidades de las personas discapacitadas, adoptando las medidas necesarias para facilitar su acceso a la información y sus relaciones con la Administración.

2.3.- La articulación del principio de transparencia de la actuación de las Administraciones Públicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma gallega

2.3.1.- El impulso de la Administración electrónica autonómica

Para lograr la transparencia en la actividad administrativa, el Legislador gallego compele a la Administración Autónoma al uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos. En este sentido, el artículo 8.1 de la Ley 4/2006 establece que la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia impulsará el empleo y la aplicación de las técnicas y medios electrónicos y telemáticos para la realización de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que, para la utilización de estos medios establecen la Constitución y las Leyes. En concreto, por un lado, el apartado segundo de este precepto exige que la tramitación de los procedimientos administrativos se apoye en la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, respetando las garantías y cumpliendo los requisitos previstos para cada caso en el Ordenamiento jurídico y, por otro lado, el apartado cuarto obliga a la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia a mantener un registro telemático en el cual las personas puedan presentar sus solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la misma, a sus Organismos Autónomos y a los demás Entes Públicos Autonómicos que tramiten procedimientos administrativos.

En cualquier caso, por evidentes razones de eficiencia en la asignación de los recursos públicos, la inmersión de la Administración Autonómica gallega en el mundo de la Administración electrónica ha de ser ordenada, desde el punto de vista de la coherencia y compatibilidad de medios y sistemas y de la uniformidad de actuación. Por ello, el apartado 3 del citado artículo 8 establece que la introducción de medios informáticos y telemáticos en la gestión administrativa ha de estar presidida por los principios de eficiencia y racionalidad de las inversiones realizadas y deberá ajustarse a los criterios establecidos, en su caso, por la Consellería competente en materia de tecnologías de la información en la Administración Pública.

Hay que señalar, finalmente, que, de acuerdo con la Disposición Adicional Tercera de la Ley 4/2006, todas las publicaciones realizadas en las páginas web, previstas en la misma que se indicarán en los siguientes epígrafes, tendrán carácter meramente informativo y su contenido no vinculará a la Administración actuante. Así, en cualquier caso, los contenidos publicados en el "Diario Oficial de Galicia" prevalecerán sobre los de las referidas páginas web.

En consecuencia, lógicamente, a los efectos de cómputo de plazos, se tendrá en cuenta exclusivamente la fecha de publicación en el "Diario Oficial de Galicia" o, en su caso, la fecha de la notificación o publicación a que se refieren los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.3.2.- El derecho de los particulares a la obtención de una información clara, completa y comprensible en sus relaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 4/2006, los particulares tienen derecho a solicitar y obtener, en forma clara y comprensible, teniendo en cuenta cualquier tipo de discapacidad física o psíquica que puedan padecer, información, tanto de carácter general como de carácter particular, sobre todos aquellos aspectos de la actividad administrativa que puedan afectar a sus derechos e intereses legítimos. En particular, los Entes sujetos a la Ley 4/2006 han de proporcionar, en cada caso, una adecuada información sobre los derechos ejercitables y sobre los recursos pertinentes.

Este derecho a la información constituye la superación del ya consagrado derecho de acceso a los documentos administrativos. Así, el acceso a la información comprende no sólo el acceso a los archivos y registros a que se refiere el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sino que va más allá, en la medida en que permite a los particulares obtener de las Administraciones Públicas informaciones no formalizadas en documentos y por tanto no archivadas.

Por lo que respecta al modo en que los particulares pueden acceder a la antedicha información, hay que señalar que la Ley permite, por un parte, que, además de ante el concreto Ente que debe proporcionarla, dicha información pueda ser recabada en las oficinas de atención al ciudadano que se establezcan, y, por otra parte, que la solicitud de dicha información se lleve a cabo presencialmente, por escrito o bien por cualquier medio electrónico, informático o telemático que permita su debida constancia.

Por otra parte, en aras a garantizar la efectividad de este derecho a la información, la Ley 4/2006 impone dos obligaciones a los Entes a ella sujetos:

- en primer lugar, cada uno de dichos Entes ha de elaborar y publicar un instrumento de información general sobre su estructura orgánica y funcional, los servicios públicos que presta y la ubicación de sus unidades administrativas. En especial, este instrumento habrá de detallar cuál es el procedimiento que los interesados han de seguir para presentar solicitudes o realizar cualquier tipo de actuaciones ante los mismos.

- en segundo lugar, cada Consellería o unidad administrativa con actuación de relevancia externa, así como todo Organismo o Ente del sector público autonómico de las mismas características, dispondrá de una página web, a través de la cual se podrá acceder a la información general antes mencionada y a la necesaria sobre la tramitación de los distintos procedimientos administrativos de su competencia.

Finalmente, en este marco del derecho al acceso a la información, el artículo 5 de la Ley 4/2006 reconoce dos derechos específicos a los interesados en cada concreto procedimiento administrativo:

a) el derecho a conocer la identidad del funcionario actuante. Así, el antedicho precepto dispone que en la notificación de las resoluciones y acuerdos administrativos, incluso en aquellas referidas a actos de trámite, se indicará siempre el funcionario público o autoridad que los dictó, con expresión de su nombre y del cargo que ostenta.

b) el derecho a la obtención de información adicional sobre toda resolución o acuerdo administrativo que le sea notificado. Para garantizar la efectividad de este derecho, el antedicho artículo dispone:

- en primer lugar, que en la notificación de las resoluciones y acuerdos administrativos, incluso en aquellas referidas a actos de trámite, se hará constar la dirección postal, el teléfono y la dirección de correo electrónico a la que la persona interesada podrá dirigir sus solicitudes de información adicional en relación con el acto notificado. Las solicitudes que se realicen al amparo de este derecho serán contestadas por el medio solicitado por la persona interesada en el procedimiento. De acuerdo con la Ley 4/2006, la contestaciones a dichas solicitudes tendrán carácter meramente informativo para el solicitante, sin que pueda ser invocada a efectos de interrupción o suspensión de plazos, caducidad o prescripción.

- en segundo lugar, obliga a que la Administración Autonómica adopte las medidas pertinentes para que en los procedimientos que se tramiten en soporte informático los interesados puedan conocer el estado de tramitación de dichos procedimientos por conducto telemático o informático. Con este fin, se obliga a que la Administración facilite una contraseña personal que permita a los ciudadanos su identificación como interesados en los diferentes procedimientos.

2.3.3.- Las medidas que se insertan en la regulación de los diferentes instrumentos y actividades de la Administración Pública autonómica para impulsar la transparencia de la misma

2.3.3.1.- Las medidas para impulsar la transparencia en el ámbito de la actividad planificadora

De acuerdo con el Ordenamiento vigente, corresponde al Consello de la Xunta de Galicia, en ejercicio de las competencias que le son propias, fijar los objetivos de interés público gallego a alcanzar por la Administración General de la Comunidad Autónoma y los plazos en los cuales éstos deben ser realizados.

Una vez fijados ambos, el artículo 7 de la Ley 4/2006 impone a la Administración General de la Comunidad Autónoma la obligación de formalizar el diseño de las actuaciones que pretende llevar a cabo para alcanzar dichos objetivos, para lo que le exige la aprobación de programas anuales y plurianuales de actuación.

El fin que la norma persigue con el establecimiento de la obligación de aprobar estos programas es doble: por una parte, informar a la ciudadanía de cuáles son las actuaciones que se pretenden realizar para llevar a cabo cada uno de los objetivos de interés general que ha individuado el Consello de la Xunta; y, por otra parte, posibilitar que los particulares intervengan en la elaboración de dichos instrumentos de planificación, en este sentido, el propio artículo 7.2 ordena a la Administración de la Comunidad Autónoma que, por vía reglamentaria, articule y promueva las fórmulas adecuadas para que los ciudadanos, individualmente o por medio de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley, puedan participar en el diseño y elaboración de los citados programas. En este sentido, para fomentar la información y participación ciudadana, el apartado 4 de este mismo precepto, señala que la página web correspondiente contendrá la información sobre los programas, sus objetivos y las formas de participación en la elaboración de los mismos.

Estos programas anuales o plurianuales, de acuerdo con el citado artículo, han de tener el siguiente contenido mínimo: en primer lugar, la concreción de los objetivos fijados por el Consello de la Xunta; en segundo lugar, la determinación de las actividades y medios necesarios para ejecutarlos; en tercer lugar, la identificación de las personas o los órganos responsables de la ejecución de los mismos; y, por último, en cuarto lugar, la previsión del tiempo estimado para su consecución.

Finalmente, el apartado tercero de este artículo 7 establece que el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en los programas anuales o plurianuales será evaluado periódicamente por los órganos competentes en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

2.3.3.2.- Las medidas para impulsar la transparencia en el ámbito de la actividad normativa

El artículo 9 de la Ley 4/2006 diseña un novedoso procedimiento de participación de los ciudadanos en el proceso de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general. Ante todo hay que resaltar que este sistema nace con la voluntad de ser un plus participativo en esta materia ya que, de acuerdo con lo que señala el apartado tercero del citado precepto, este nuevo trámite, en ningún caso, substituye al trámite de audiencia pública, en los supuestos en los que sea preceptivo de acuerdo con la normativa de aplicación.

Como premisa para poder hacer posible esta participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias, el artículo 9.1 de la Ley 4/2006 establece que cada Consellería ha de publicar en su página web la relación circunstanciada y motivada de los procedimientos de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación, así como la posibilidad que tienen las personas de remitir sugerencias y la forma de hacerlo.

Sobre la base de dicha información, los ciudadanos, individualmente o por medio de asociaciones que los agrupen o representen, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia o, en su caso, al informe final de la Secretaría General, podrán remitir sugerencias relativas a aquellos proyectos que les afecten.

Hay que subrayar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 4/2006, la presentación de propuestas en uso del derecho que reconoce este artículo no atribuye, por sí misma, la condición de persona interesada en el procedimiento de que se trate.

Estas proposiciones, sugerencias o recomendaciones recibidas por la Administración Autónoma serán tenidas en cuenta por el órgano encargado de la redacción del texto del proyecto, que podrá asumirlas o rechazarlas a través de un informe final en el cual recibirán una respuesta razonada que podrá ser común para todas aquellas sugerencias que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

2.3.3.3.- Las medidas para impulsar la transparencia en el ámbito de la actividad convencional

2.3.3.3.1.- Las medidas para impulsar la transparencia en el ámbito de los convenios administrativos

El artículo 11 de la Ley 4/2006 pretende garantizar el correcto uso de la técnica convencional por la Administración Autónoma, para ello contempla tres medidas:

- en primer lugar, somete a la autorización previa del Consello de la Xunta de Galicia la firma de los convenios de colaboración plurianuales y los que impliquen la asunción de obligaciones económicas para la Hacienda Autónoma por importe superior a 150.000 euros².

- en segundo lugar, exige que cuando cualquiera de los Entes sujetos a la Ley 4/2006, pretenda celebrar un convenio de colaboración con un Ente privado justifique en el expediente administrativo la utilización de la figura del convenio de colaboración prevista en el artículo 3.1.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas señalando las razones que, en ese concreto supuesto, impiden la concurrencia de la oferta y, en consecuencia, excluyen la posibilidad de celebrar un contrato administrativo³.

- en tercer lugar, articula tres sistemas de publicidad de los convenios suscritos por la Xunta de Galicia: el registro, la publicación en internet y la publicación en el "Diario Oficial de Galicia".

² Hasta en el momento se venía aplicando en esta materia el acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia del veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y uno. El cual establecía que el acuerdo de que la suscripción, modificación y prórroga de todos los convenios de cooperación con otras Administraciones, Entes de Derecho público, así como todos los convenios de colaboración con particulares que otorguen las Consellerías de la Xunta de Galicia, los Organismos Autónomos o Entes de Derecho Público de la Administración Autónoma deberán ser autorizados con carácter previo por acuerdo del Consello de la Xunta en los siguientes casos:

- Los que contengan alguna obligación de gasto de carácter plurianual.

- Los que, no estando en el caso anterior, contengan alguna obligación de gasto en el ejercicio vigente por importe superior a 25.000.000 de ptas.

³ Este precepto dispone: "Quedan fuera del ámbito de la presente Ley: d) Los convenios de colaboración que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. Quedarán asimismo excluidos de la presente Ley los convenios que sean consecuencia del artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea".

Respecto del registro, el párrafo cuarto del citado artículo 11, dispone que el órgano superior competente en materia de registro de convenios ha de mantener un registro central en el cual deben figurar todos los convenios de colaboración suscritos por la Administración Autonómica. Este registro central podrá contar con secciones, en cada una de las Consellerías competentes por razón de la materia, para aquellos convenios que, por sus características especiales o por sus contenidos, así lo aconsejen. La creación de estas secciones deberá ser acordada por el Consello de la Xunta de Galicia. En todo caso, el registro central ha de estar coordinado con las antedichas secciones, las cuales tendrán que comunicar a aquél cualquier inscripción o asiento que realicen⁴.

En materia de difusión por internet, el párrafo primero del artículo 11 de la Ley 4/2006 establece que cada Consellería o Entidad publicará, en su página web, dentro de los primeros veinte días de los meses de enero, mayo y septiembre de cada año, una relación de los convenios suscritos en el cuatrimestre anterior.

Respecto de cada convenio, en dicha relación se contendrá la siguiente información: la identificación de las partes en el convenio, el objeto del convenio, el importe de las obligaciones económicas para la Hacienda Autonómica que, eventualmente, se deriven del convenio para la misma y, en el caso de los convenios con los particulares, la motivación a la que antes se hizo referencia.

Esta información, de acuerdo con la Ley 4/2006, ha de mantenerse disponible en Internet durante el ejercicio presupuestario en curso y el ejercicio inmediatamente siguiente.

Finalmente, por lo que se refiere a la publicación oficial, el artículo 11.1 de la Ley 4/2006 dispone que cada Consellería o Entidad remitirá al "Diario Oficial de Galicia", dentro de los primeros veinte días de los meses de enero, mayo y septiembre de cada año, una relación de los convenios de colaboración suscritos en el cuatrimestre anterior.

Esta relación incluirá, respecto de cada convenio, como en el caso de la publicación en internet, la siguiente información: la identificación de las partes en el convenio, el objeto del convenio, el importe de las obligaciones económicas para la Hacienda Autonómica que, eventualmente, se deriven del convenio para la misma y, en el caso de los convenios con los particulares, la motivación a la que antes se hizo referencia.

Hay que señalar que, aunque la Ley 4/2006 entró en vigor a los veinte días de su publicación en el "Diario Oficial de Galicia", el número 1 del artículo 11 todavía no es aplicable ya que entrará en vigor a los seis meses de la publicación de dicha Ley en el "Diario Oficial de Galicia", de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de la misma.

⁴ Este registro, creado en el año 2002, se regula actualmente por el Decreto 126/2006, de 20 julio.

2.3.3.3.2.- Las medidas para impulsar la transparencia en el ámbito de los contratos públicos

En materia de contratos públicos, el artículo 10 de la Ley 4/2006 fija los principios que los órganos de contratación deben seguir en la contratación pública, establece la ponderación mínima del precio como criterio de adjudicación, y, finalmente, regula la publicidad complementaria de los contratos públicos.

2.3.3.3.2.1.- Los principios en materia de contratación

De acuerdo con el artículo 10.1 de la Ley 4/2006, los órganos de contratación de las Entidades sujetas a la misma están obligados a dar a todos los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y a actuar con transparencia en el ejercicio de sus competencias.

2.3.3.3.2.2.- La ponderación del precio como criterio de adjudicación

El artículo 10.5 de la Ley 4/2006 establece que, como regla general, en los contratos adjudicados por concurso, la ponderación del precio como criterio de adjudicación del contrato no será inferior al 40% de la puntuación máxima que pueda atribuirse a las ofertas. No obstante, este precepto permite que el órgano de contratación mediante resolución motivada pueda excepcionar esta regla cuando la relación entre la calidad y el precio así lo exija.

2.3.3.3.2.3.- Las normas de publicidad complementaria: anuncios de licitación, de adjudicación y de cesión y subcontratación.

En los procedimientos de contratación en los que, de acuerdo con la normativa de contratos públicos vigente, sea preceptiva la publicación de anuncios de licitación, el órgano de contratación, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 4/2006, ha de publicar, con carácter complementario, un anuncio en su página web, en el cual debe indicar: el objeto del contrato, su precio, la referencia del Diario Oficial en que se publicó el anuncio, la fecha de finalización del plazo de recepción de ofertas o solicitudes de participación y el lugar donde éstas habrán de ser presentadas, así como los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas. Esta publicación será facultativa para los órganos de contratación en el caso de aquellos contratos públicos que no estén sometidos por la normativa de aplicación a publicidad obligatoria.

Una vez adjudicados los contratos públicos, el artículo 10.3 de la Ley 4/2006 establece que cada órgano de contratación ha de publicar en su página web la siguiente información: a) Los licitadores; b) Los criterios de selección y su valoración; c) El cuadro comparativo de las ofertas económicas; d) La puntuación obtenida por cada oferta, detallando

la otorgada para cada uno de los criterios de valoración; e) El resumen de la motivación de la valoración obtenida; f) El adjudicatario; g) En su caso, las modificaciones del contrato adjudicado que supongan un incremento igual o superior al 20% del precio inicial del contrato, cuando éste sea superior a 1.000.000 euros.

No obstante, este mismo precepto establece varias excepciones a la obligación de publicar en internet los resultados de la adjudicación de los contratos públicos. Dichas excepciones son:

- en primer lugar, no procederá, en ningún caso, la divulgación de aquellas informaciones que los operadores económicos hayan designado como confidenciales a la hora de facilitarlas. Dentro de estas informaciones confidenciales la Ley incluye expresamente los secretos técnicos o comerciales.

- en segundo lugar, queda en manos del órgano de contratación la decisión de no publicar una determinada información relativa a la adjudicación de un contrato cuando su divulgación: a) constituya un obstáculo para aplicar la legislación; b) sea contraria al interés público; c) perjudique los intereses comerciales legítimos de los operadores económicos públicos o privados; o d) pueda perjudicar la competencia leal entre los operadores económicos públicos o privados.

La decisión de no publicar una determinada adjudicación deberá ser adoptada de forma motivada por el órgano de contratación correspondiente, haciendo referencia a cuál de las anteriores circunstancias justifica dicha actuación.

Finalmente, por lo que respecta a la publicidad complementaria, el artículo 10.4 de la Ley 4/2006 dispone que, cuando se proceda a la cesión de un contrato o a la subcontratación, se dará publicidad a estas circunstancias indicando en el acuerdo de publicidad: las razones que justifican tal decisión, la identidad de los cesionarios y subcontratistas y el contenido de los acuerdos alcanzados entre el contratista y aquéllos. A este supuesto le son de aplicación las mismas excepciones a la publicación que las expuestas en el caso de la difusión de las adjudicaciones de los contratos.

2.3.3.4.- Las medidas para impulsar la transparencia en el ámbito de las formas de la actividad administrativa

2.3.3.4.1.- Las medidas para impulsar la transparencia en el ámbito de la actividad de servicio público

Con el fin de garantizar los derechos de los usuarios de los servicios públicos autonómicos, la Ley 4/2006 disciplina, por una parte, las cartas de servicios y, por otra parte, establece las bases para la imposición de ciertas obligaciones a los concesionarios de servicios públicos autonómicos.

2.3.3.4.1.1.- Las cartas de servicios

El artículo 6.1 de la Ley 4/2006 define las cartas de servicios como aquellos documentos de acceso público a través de los cuales los órganos de la Administración Autonómica gallega y sus Organismos Administrativos informan a los ciudadanos sobre los derechos que les corresponden en sus relaciones con la respectiva Entidad, las concretas obligaciones y responsabilidades que éstas asumen para garantizar aquellos derechos y los adecuados niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos que tienen encomendados, así como aquellos otros que se entiendan relevantes a estos efectos⁵.

De acuerdo con el apartado 2 de este mismo precepto, el ámbito de las cartas de servicios es el de las Consellerías, no obstante esta norma permite que, en ocasiones, si se estima más conveniente, sea el de una unidad de las mismas.

Las cartas de servicios, una vez aprobadas por la Consellería materialmente competente, de acuerdo con el artículo 6.3 de la Ley 4/2006, con el fin último de que las personas interesadas conozcan los compromisos contenidos en las mismas y puedan demandar, en su caso, su cumplimiento, se publicarán en el "Diario Oficial de Galicia", en la página web de la Consellería u órgano correspondiente y serán objeto de divulgación por todos los medios al alcance de la Administración que las aprueba.

2.3.3.4.1.2.- Las concesiones de servicios públicos

El artículo 12 de la Ley 4/2006, por una parte, establece que la gestión de los servicios públicos por los concesionarios debe llevarse a cabo de acuerdo con el principio de transparencia y, por otra parte, establece una serie de derechos, entendida como un mínimo indisponible, que la Administración Autonómica debe garantizar a los usuarios de los servicios públicos autonómicos gestionados en régimen de concesión, mediante la inclusión de las previsiones oportunas en los pliegos de cláusulas administrativas que disciplinan dichas concesiones.

Así, los derechos de los usuarios que, de acuerdo con el citado precepto, deben ser garantizados por la Administración Autonómica son: en primer lugar, el derecho a la igualdad de trato en el acceso y el uso del servicio, en particular, la Ley recalca que, en ningún caso, puede existir discriminación, ni directa ni indirecta, por razones de sexo; en segundo lugar, el derecho a utilizar, a su elección, el gallego o el castellano en sus relaciones con la entidad concesionaria y con sus representantes y trabajadores; en tercer lugar, el derecho a

⁵ Las cartas de servicios de la Administración Autonómica se encuentran reguladas con el mismo contenido que establece ahora la Ley 4/2006 en el Decreto 148/2004, de 1 julio, de Cartas de Servicios y Observatorio de la Calidad.

presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio, que habrán de ser contestadas de forma motivada e individual; en cuarto lugar, el derecho a acceder a toda la información que obre en poder de la concesionaria y sea precisa para formular quejas o reclamaciones sobre la prestación del servicio, de este derecho, de acuerdo con el precepto antedicho, quedan excluidos los documentos que afecten a la intimidad de las personas y los relativos a materias protegidas por el secreto comercial o industrial, así como, en general, aquellos que estén protegidos por la Ley; en quinto lugar, el derecho a obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la concesionaria, en relación con la prestación del servicio.

Finalmente, no siendo ya necesario que se prevea en las cláusulas administrativas, pese al tenor literal de la Ley 4/2006, ya que se trata de una facultad que posee siempre la Administración, la Ley les reconoce a los usuarios de los servicios públicos autonómicos gestionados en régimen de concesión el derecho a exigir de la Administración concedente el ejercicio de sus facultades de inspección, control y, en su caso, sanción para subsanar las irregularidades en la prestación del servicio.

2.3.3.4.2.- Las medidas para impulsar la transparencia en el ámbito de la actividad de fomento

En materia de fomento, el artículo 13 de la Ley 4/2006, por una parte, fija los principios que deben inspirar la convocatoria, el otorgamiento, la gestión y el control de las subvenciones y ayudas públicas autonómicas y, por otra parte, establece un sistema de publicidad de dichas subvenciones y ayudas públicas.

En primer lugar, de conformidad con el citado precepto, los principios que deben inspirar la convocatoria y el otorgamiento de las subvenciones y ayudas públicas autonómicas son los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y eficiencia en la asignación de los recursos públicos. A su vez, la gestión y el control de las subvenciones y ayudas públicas autonómicas deben regirse por los principios de transparencia, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

En segundo lugar, el párrafo cuarto del citado precepto dispone que cada Consellería, Organismo o Entidad de Derecho Público vinculada o dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma que realice actividades de fomento mediante el otorgamiento de fondos públicos tendrá que publicar en su página web:

1º) Una relación actualizada de las líneas de ayudas o subvenciones que vayan a convocarse durante cada ejercicio presupuestario, con indicación de los importes destinados a las mismas, su objetivo o finalidad y la descripción de los posibles beneficiarios.

De acuerdo con el artículo 13.5 de la Ley 4/2006 se entienden incluidas entre estas ayudas o subvenciones:

a) Las concesiones de créditos oficiales por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma, cuando se otorguen sin intereses o con intereses inferiores a los de mercado.

b) Las concesiones de ayudas en que la Administración asuma la obligación de satisfacer a la entidad prestamista todo o parte de los intereses.

c) Las condonaciones de créditos.

d) Cualquier otro acuerdo o resolución de los cuales resulte un efecto equivalente a la obtención de ayudas directas por parte del beneficiario.

e) Las aportaciones dinerarias realizadas por la Comunidad Autónoma a favor de las Entidades Locales, siempre que no estén destinadas a financiar globalmente la actividad de cada Ente.

2º) El texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones.

3º) Las concesiones de dichas ayudas o subvenciones, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación o publicación, indicando únicamente la relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora. No obstante, el artículo 13. 6 de la Ley 4/2006 permite que sean excluidos de la publicación:

a) Aquellos supuestos en que la publicación de los datos del beneficiario, en razón del objeto de la ayuda, sea contraria al respeto y salvaguarda del honor e intimidad personal y familiar de las personas físicas, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen.

b) Aquellos datos que estén protegidos por el secreto comercial o industrial.

c) Con carácter general, aquellos supuestos, o aquellos datos, en que así lo exijan o aconsejen razones prevalentes por la existencia de un interés público más digno de protección, que, en todo caso, habrá de motivarse expresamente.

3.- EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA GALLEGA

3.1.- El ámbito subjetivo del Código de Buenas Prácticas Administrativas

El código de buenas prácticas administrativas contenido en la Ley 4/2006 es de aplicación a los miembros del Gobierno gallego y a los Altos Cargos de la Administración Autonómica. De conformidad el artículo 14 de dicha Ley son Altos Cargos de la Administración Autonómica:

- 1) Los secretarios y directores generales y los cargos asimilados a los mismos.
- 2) Los delegados y representantes del Gobierno gallego en los Entes con personalidad jurídica pública.
- 3) Los presidentes, directores generales y asimilados de los Organismos Autónomos.
- 4) Los delegados provinciales y territoriales de los departamentos de la Xunta de Galicia.
- 5) El personal eventual que, en virtud de nombramiento legal, ejerza funciones de carácter no permanente, expresamente calificadas de confianza y asesoramiento especial, en los gabinetes del Presidente y de los demás miembros del Consello de la Xunta de Galicia.
- 6) Los presidentes, directores generales, directores ejecutivos, directores técnicos y titulares de otros puestos o cargos asimilados, cualquiera que sea su denominación, en Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la Administración Autonómica, cuyo nombramiento sea efectuado por decisión del Consello de la Xunta de Galicia o por sus propios órganos de gobierno.
- 7) Los presidentes, directores generales y asimilados de las Empresas Públicas, Sociedades o Fundaciones en que la Xunta de Galicia, directa o indirectamente, participe o aporte más del 50% del capital o del patrimonio, cuando tales cargos sean designados previo acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia o por sus propios órganos de gobierno.
- 8) El personal eventual que, en virtud de nombramiento legal, ejerza funciones de carácter no permanente, expresamente calificadas de confianza y asesoramiento especial de los presidentes y directores generales de las Entidades sujetas a la Ley 4/2006.
- 9) Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo de la Administración Autonómica, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consello de la Xunta de Galicia.

La Disposición Adicional Primera de esta Ley 4/2006 modifica el artículo 2 de la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de Incompatibilidad de Altos Cargos de modo que sustituye su redacción por una idéntica a la contenida en el artículo 14 con el fin de coordinar el ámbito de aplicación de ambas normas⁶. El principal efecto de esta modificación consiste en la inclusión en el sistema de incompatibilidad de Altos Cargos al personal eventual que, en virtud de nombramiento legal, ejerza funciones de carácter no permanente, expresamente calificadas de confianza y asesoramiento especial de los presidentes y directores generales de las entidades sujetas a la Ley 4/2006, que no se contemplaba en la redacción original de la Ley 9/1996.

Finalmente, hay que señalar que, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 4/2006, el tratamiento oficial que corresponde a los miembros del Gobierno Autonómico y a los Altos Cargos de la Administración Autonómica será el de señor o señora, seguido de la denominación del cargo, empleo o rango correspondiente.

3.2.- Los requisitos del proceso de nombramiento de algunos Altos Cargos de la Administración Autonómica

El artículo 16 de la Ley 4/2006 obliga al Consello de la Xunta de Galicia a que, con carácter previo al nombramiento de determinados cargos públicos, ponga en conocimiento del Parlamento de Galicia el nombre de las personas propuestas para estos cargos, con el fin de que éste pueda disponer su comparecencia ante la Comisión correspondiente de la

⁶ La dición anterior decía: "El régimen de incompatibilidades establecido en la presente Ley será de aplicación a los siguientes cargos públicos:

- a) Los miembros del Gobierno Autonómico.
- b) Los secretarios generales, directores generales y cargos asimilados.
- c) Los delegados y representantes del Gobierno gallego en los entes con personalidad jurídica pública
- d) Los presidentes, directores generales y asimilados de los organismos autónomos.
- e) Los delegados provinciales y territoriales de las consellerías de la Xunta de Galicia.
- f) El personal eventual que, en virtud de nombramiento legal, ejerza funciones de carácter no permanente, expresamente calificadas de confianza y asesoramiento especial, en los gabinetes del presidente y de los conselleiros de la Xunta de Galicia.
- g) Los presidentes, directores generales, directores ejecutivos, directores técnicos y titulares de otros puestos o cargos asimilados, cualquiera que sea su denominación, en entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración Autonómica, cuyo nombramiento sea efectuado por decisión del Consello de la Xunta de Galicia o por sus propios órganos de gobierno.
- h) Los presidentes, directores generales y asimilados de las empresas públicas, sociedades o fundaciones en que la Xunta de Galicia, directa o indirectamente, participe o aporte más del 50% del capital o patrimonio, cuando tales cargos sean designados previo acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia o por sus propios órganos de gobierno.
- i) Los titulares de cualquier otro puesto de trabajo de la Administración Autonómica, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consello de la Xunta de Galicia".

Cámara. Dicha Comisión Parlamentaria examinará, en su caso, las candidaturas propuestas. A estos efectos, los miembros de la misma podrán formular las preguntas o solicitarán las aclaraciones que estimen convenientes.

En concreto, los cargos cuyo nombramiento tiene que ser informado por el Parlamento de Galicia son: el director general de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia, el presidente del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, el presidente del Consejo Económico y Social, el presidente del Consejo de la Cultura Gallega, y los presidentes de aquellos otros órganos que puedan establecerse por Ley cuyo nombramiento sea realizado por el Consello de la Xunta por un período de tiempo determinado.

3.3.- Los principios de actuación que han de regir la actividad de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Comunidad Autónoma gallega

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4/2006, los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración Autónoma adecuarán su actividad a los siguientes principios éticos de actuación:

- En sus relaciones con los administrados, los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración Autónoma mantendrán una conducta digna, tratando a los ciudadanos con esmerada corrección y prestarán especial atención a las necesidades personales y materiales de las personas discapacitadas, adoptando las medidas necesarias para facilitar su acceso a la información y sus relaciones con la Administración.

En la realización de las funciones que les hayan sido encomendadas, los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración Autónoma: realizarán con lealtad e integridad las funciones o cometidos que tengan asignados; observarán un comportamiento ético ordenado a la satisfacción del interés general; actuarán de buena fe y con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos; actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, favoreciendo la accesibilidad y receptividad de la Administración a todos los ciudadanos; ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que les fueron otorgados; evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público; respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular; se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad; tratarán de igual forma a todas las personas que se encuentren en idénticas situaciones, sin hacer discriminaciones; promoverán la adopción de medidas de acción positiva para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres y para la protección de los colectivos desfavorecidos; usarán normalmente el gallego, oralmente y por escrito, en sus relaciones con la ciudadanía; guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones de que tengan conocimiento con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias; serán responsables de las acciones reali-

zadas en el desarrollo de sus funciones; garantizarán la ausencia de arbitrariedad en la adopción de sus decisiones y pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.

-En la gestión de los recursos públicos, a los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración Autonómica les corresponde proteger y conservar los medios públicos y no utilizar los recursos públicos para actividades que no sean las autorizadas para los mismos.

-En el desarrollo de su vida privada, los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración Autonómica: no se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, observando estrictamente el régimen de incompatibilidades previstas en la Ley reguladora de las mismas y en su normativa de desarrollo; no aceptarán regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones; usarán las prerrogativas inherentes a sus cargos únicamente para el cumplimiento de sus funciones y deberes y no se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.

3.4.- La publicidad de las actividades, retribuciones y bienes de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración Autonómica

El artículo 17 de la Ley 4/2006 establece que, en la página web de la Xunta de Galicia, se publicarán nominalmente las retribuciones públicas percibidas por los miembros del Gobierno y por los Altos Cargos de la Administración Autonómica, con expresa indicación de los diferentes conceptos retributivos.

Por otra parte, pero también en esta materia, la Disposición Adicional Segunda de la citada Ley modifica el artículo 10 de la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de Incompatibilidad de Altos Cargos que crea y regula el Registro de Actividades de Altos Cargos y el Registro de Bienes Patrimoniales de Altos Cargos de la Xunta de Galicia.

De acuerdo con la nueva redacción de este precepto, el contenido de las declaraciones pertenecientes a los titulares de aquellos puestos cuyo nombramiento sea efectuado por decisión del Consello de la Xunta de Galicia que se hallen inscritas en el Registro de Actividades de Altos Cargos se publicará en el "Diario Oficial de Galicia" y estará disponible en internet⁷. A su vez, según esta misma norma, del contenido del Registro de Bienes Pa-

⁷ En la redacción anterior se establecía que el Registro de Actividades de Altos Cargos tenía carácter público y al mismo podría acceder cualquier persona que tuviesen interés en conocer las inscripciones efectuadas.

trmoniales de Altos Cargos de la Xunta de Galicia se dará cuenta anualmente al Parlamento, de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento de la Cámara, si bien de esta información al Parlamento están excluidas las copias de la última declaración tributaria correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, del Impuesto sobre el Patrimonio exigidas por el artículo 8.1.b) de la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de Incompatibilidades de Altos Cargos⁸. Por último, hay que señalar que al contenido de este Registro de Bienes Patrimoniales de Altos Cargos de la Xunta de Galicia también tendrán acceso: a) Los órganos judiciales, para la instrucción o resolución de procesos que requieran el conocimiento de los datos obrantes en el registro, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes procesales; b) El Ministerio Fiscal, cuando realice actuaciones de investigación en el ejercicio de sus funciones que requieran el conocimiento de los datos obrantes en el Registro; c) El Defensor del Pueblo y el Valedor do Pobo, en los términos previstos en sus Leyes de creación⁹.

⁸ Este artículo 8 reza: "1. Los cargos a que hace referencia el artículo 2 de esta Ley están obligados a formular las siguientes declaraciones:

a) Declaración de actividades que desarrollen por sí mismos o mediante sustitución o apoderamiento ante el Registro de Actividades e Intereses de Altos Cargos. Esta vendrá referida a cualquier actividad, negocio, empresa o sociedad pública o privada que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos o en los que tengan participación o intereses.

b) Declaración de bienes patrimoniales ante el correspondiente Registro constituido al efecto, referida a los que integren el patrimonio del interesado, comprensiva de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, a la que se adjuntará la copia de la última declaración tributaria correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y al impuesto sobre el patrimonio neto en caso de que el declarante tuviera obligación de presentarlo ante la Administración tributaria.

Esta declaración deberá incluir las participaciones en todo tipo de empresas y sociedades pertenecientes al cargo de los comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y a las personas mencionadas en el artículo 3.4.

A esta declaración podrán acompañar la relativa al patrimonio de su cónyuge, o persona vinculada por análoga relación, con su previo consentimiento, y al patrimonio de los hijos dependientes".

⁹ La redacción anterior de este artículo disponía que el Registro de Bienes Patrimoniales de Altos Cargos tendría carácter reservado y, como tal, sólo podrían acceder al mismo: a) El Parlamento de Galicia, de acuerdo con lo que al efecto dispusiese el Reglamento de la Cámara; b) Los órganos judiciales, para la instrucción o resolución de procesos que requiriesen el conocimiento de los datos obrantes en el Registro, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales; c) El Ministerio Fiscal, cuando realizase actuaciones de investigación en el ejercicio de sus funciones que requiriesen el conocimiento de los datos obrantes en el Registro; d) El Defensor del Pueblo y el Valedor do Pobo, en los términos previstos en sus Leyes de creación.

I. DISPOSICIÓN XERAIS

PRESIDENCIA

Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega.

Preámbulo

A participación da cidadanía nos asuntos públicos confórmase hoxe como un elemento fundamental no contexto dun novo modelo de goberno caracterizado pola transparencia, a información e a asunción de responsabilidades, e constitúe, ademais, unha expresa encomenda que o artigo 9.2 da Constitución realiza aos poderes públicos en xeral e que o artigo 4.2 do noso Estatuto de autonomía deposita sobre os poderes públicos de Galicia, aos cales lles encarga a tarefa de facilitar a participación de todos os galegos e galegas na vida política, económica, cultural e social.

A competencia do Parlamento para a aprobación desta lei provén do disposto no artigo 28.1 do EAG, que, dentro do marco fixado polo artigo 149.1.18 e 149.3 da CE, recolle as atribucións da nosa comunidade autónoma para o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación do Estado en materia de réxime xurídico da Administración pública de Galicia e de réxime estatutario do seu funcionariado.

Partindo deste marco normativo cómpre reparar no feito de que a evolución experimentada na nosa sociedade, que cada vez demanda máis prestacións públicas e de maior calidade, determina unha transformación da actividade da Administración, co conseguinte incremento da complexidade na súa actuación.

Así, neste contexto, xorde a necesidade de lle ofrecer á cidadanía mecanismos de control a través da transparencia administrativa, que se configura, entón, como un fundamento esencial do sistema democrático moderno.

Nas raíces da tradición democrática europea xa está implícita a necesidade de transparencia administrativa, toda vez que no artigo 15 da Declaración dos dereitos do home e do cidadán de 1789 se establece que a sociedade ten dereito a exixir a todo axente público que lle renda contas da súa administración.

A evolución histórica do sistema político-administrativo amósanos unha etapa en que o recoñecemento formal do segredo constituía un principio propio da actuación das administracións públicas.

Superada esa etapa, aparece a transparencia como criterio orientador da actividade das administracións públicas para garantir o cumprimento da legalidade, a eficacia e a eficiencia na xestión dos recursos públicos.

No momento actual, cómpre reforzar e impulsar o proceso de racionalización e transparencia na actividade da Administración, coa finalidade de eliminar a súa imaxe de opacidade e inaccesibilidade, que xera desconfianza na cidadanía.

A transparencia permite facer efectivo o dereito dos cidadáns e da sociedade civil a coñecer a actividade da Administración e favorece o control da legalidade e oportunidade das decisións administrativas, facilitando que a sociedade asuma un papel activo na vida administrativa.

Unha opinión pública informada contribúe a definir e realizar accións públicas respectuosas co interese xeral. En consecuencia, resulta necesario fortalecer o dereito subxectivo de acceso á información e fomentar a creación de servizos de información administrativa que aproveiten o desenvolvemento das novas tecnoloxías como canles de transmisión e difusión.

A información obtida pola cidadanía permite a vixilancia eficaz e efectiva sobre a acción dos poderes públicos, eliminando o risco da existencia de actuacións desviadas do interese xeral.

En definitiva, as medidas incluídas nesta lei contribuirán a facer máis efectivo o dereito a unha boa administración, como principio consagrado no noso acervo xurídico desde a aprobación da Carta dos dereitos fundamentais da Unión Europea.

Ademais, os avances da sociedade da información teñen un valor engadido no ámbito da nosa comunidade autónoma, pois os importantes movementos migratorios sufridos no pasado polo noso pobo conformaron unha singular xeografía política das comunidades galegas espalladas polo mundo. As novas tecnoloxías tenden pontes de comunicación cos galegos residentes no exterior, e as medidas que esta lei introduce con base nese soporte contribuirán a facer efectivos os dereitos que a aqueles lles recoñece o artigo 3 do EAG.

Por outra parte, unha Administración eficiente na utilización dos recursos públicos e comprometida coa satisfacción das necesidades da cidadanía debe contar con profesionais respectuosos cos principios éticos e de conduta, que conforman un código de boas prácticas administrativas que se positiviza en esta lei. Estes principios están implícitos nos deberes do persoal ao servizo das administracións públicas e a súa vulneración xera unhas efectivas consecuencias xurídicas.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 (do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, promulgo en nome de El-Rei, a Lei de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega.

Capítulo I

Ámbito e principios xerais

Artigo 1º.-Ámbito de aplicación.

1. Esta lei será de aplicación:

- a) Á Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
- b) Aos organismos autónomos, ás sociedades públicas, ás fundacións do sector público autonómico e ás demais entidades de dereito público vinculadas ou dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
- c) Aos órganos con dotación diferenciada nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia que, carecendo de personalidade xurídica, non estean formalmente integrados na Administración da Comunidade Autónoma.
- d) Aos entes e ás empresas nas que ten participación maioritaria a Xunta de Galicia en materia de persoal e contratación ás que fai referencia a Lei 10/1996, do 5 de novembro.

2. Sen prexuízo do disposto na normativa de xeral aplicación, os concesionarios de servizos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia someterán a súa actuación ás disposicións que nesta lei regulan expresamente a súa actividade.

Artigo 2º.-Principios xerais.

As entidades comprendidas no ámbito de aplicación desta lei e o persoal ao seu servizo, ademais de cumpriren o disposto na Constitución, no Estatuto de autonomía e no resto do ordenamento xurídico, adecuarán as súas actividades aos seguintes principios xerais:

- a) Procurar a satisfacción do interese xeral na toma de decisións.
- b) Garantir a transparencia, a eficacia e a eficiencia na organización e na xestión pública.
- c) Proporcionar e difundir información constante, veraz, obxectiva e clara sobre a actuación do sector público autonómico.

- d) Potenciar a súa accesibilidade e receptividade co obxecto de facilitar o coñecemento por parte da cidadanía das informacións e xestións que resulten do seu interese.
- e) Fomentar e favorecer a participación da cidadanía nos asuntos públicos e no deseño e mellora dos servizos públicos. En particular fomentarase a participación equilibrada das mulleres e dos homes nos asuntos públicos.
- f) Manter un diálogo aberto, transparente e regular coas asociacións representativas e coa sociedade civil.
- g) Garantir nas súas relacións coa cidadanía o principio de non-discriminación por razón de xénero, raza, relixión ou crenza, ideoloxía, capacidade física ou psicolóxica, ou calquera outra circunstancia de índole persoal ou social. Buscarase especialmente e nos termos recollidos na Lei 7/2004 a eliminación absoluta das discriminacións directas e indirectas.
- h) Facer efectivos os principios de racionalidade, claridade e confianza lexítima na relación da Administración cos cidadáns.
- i) Impulsar o emprego das técnicas informáticas e telemáticas para o desenvolvemento da súa actividade e o exercicio das súas competencias.
- j) Promover o uso normal do galego, oralmente ou por escrito, nas relacións coa cidadanía, sen prexuízo do dereito de non-discriminación por razóns da lingua.
- k) Prestarlles especial atención ás necesidades das persoas discapacitadas, adoptando as medidas necesarias para facilitar o seu acceso á información e as súas relacións coa Administración.

Capítulo II

Transparencia na actividade administrativa

Artigo 3º.-Dereitos das persoas nas súas relacións coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Sen prexuízo dos dereitos recoñecidos na Constitución española, na lexislación europea, no Estatuto de autonomía de Galicia e na lexislación básica do Estado, as persoas, nas súas relacións coas administracións públicas galegas comprendidas no ámbito desta lei, teñen os dereitos que nela se establecen.

Artigo 4º.-Dereito das persoas á información.

1. As persoas teñen dereito a solicitar e obter información sobre os aspectos da actividade administrativa das institucións e órganos mencionados no artigo 1 desta lei que afecten aos seus dereitos e intereses lexítimos. A devandita información poderá ser de carácter xeral ou particular e comprende así mesmo o acceso aos arquivos e rexistros a que se refire o artigo 37 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

A información solicitada facilitarase de maneira clara e comprensible, garantíndose a suficiente difusión da información sobre os dereitos e sobre os recursos que, se é o caso, sexan pertinentes.

2. Para facer efectivo este dereito, as administracións e organismos incluídos no campo de aplicación desta lei contarán cos instrumentos de información xeral sobre os servizos públicos que prestan, a súa estrutura orgánica e funcional e a localización das súas unidades administrativas.

3. A través destes instrumentos facilitarase a información que lles garante ás persoas o seu efectivo coñecemento do procedemento que se deberá seguir para as solicitudes ou actuacións que se propoñan realizar ante aquelas.

4. Todas as persoas poderán obter as informacións indicadas nas oficinas de atención ao cidadán que se establezan, ben presencialmente, ben por escrito ou ben por calquera medio electrónico, informático ou telemático que permita a súa debida constancia.

Tamén poderán transmitirse as ditas informacións a través de calquera dos referidos medios.

5. Cada consellaría ou unidade administrativa con actuación de relevancia externa, así como todo organismo ou ente do sector público autonómico das mesmas características, disporá dunha páxina web, na que se poderá acceder á información xeral referida nesta lei e á necesaria sobre a tramitación dos distintos procedementos administrativos, de acordo co que se determine regulamentariamente.

6. Garantiráselles o máis completo acceso á información ás persoas con calquera tipo de discapacidade.

7. Regulamentariamente determinarase a articulación dos instrumentos de información a que se refire este artigo.

Artigo 5º.-Dereito á información adicional ás persoas interesadas no procedemento.

Na notificación das resolucións e dos acordos administrativos, mesmo referidos a actos de trámite, identificarase sempre a funcionaria ou funcionario público ou autoridade que os ditou, con indicación do seu nome e do cargo que desempeña. Así mesmo, farase constar o enderezo postal, o teléfono e o enderezo de correo electrónico a que a persoa interesada poderá dirixir as súas solicitudes de información adicional en relación co acto notificado, e que serán contestadas polo medio solicitado pola persoa interesada no procedemento.

Para tal fin, a Administración facilitará un contrasinal persoal que permita a identificación como interesado no procedemento.

As contestacións a que se refire o parágrafo anterior terán carácter meramente informativo para o solicitante, sen que poida ser invocada para efectos de interrupción ou suspensión de prazos, caducidade ou prescripción.

A Administración autonómica adoptará as medidas pertinentes para que nos procedementos que se tramiten en soporte informático os interesados poidan coñecer o estado de tramitación dos procedementos por conduto telemático ou informático.

Artigo 6º.-Cartas de servizos.

1. As cartas de servizos son documentos de acceso público a través dos cales os órganos da Administración autonómica galega e os seus organismos informan as persoas sobre os seus dereitos nas súas relacións coa respectiva entidade, as concretas obrigas e responsabilidades que estas asumen para garantir aqueles dereitos e os adecuados niveis de calidade na prestación dos servizos públicos que teñen encomendados, así como aqueles outros que se entendan relevantes, para estes efectos, e que se determinarán regulamentariamente.

2. As cartas de servizos son elaboradas polo órgano competente, segundo o seu ámbito, que pode ser o dunha consellaría ou o de unidades inferiores desta se se considera máis adecuado.

3. A aprobación das cartas de servizos, que lle corresponde á consellaría materialmente competente, publicarase no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da consellaría ou órgano correspondente.

4. As entidades a que fai referencia este artigo divulgarán polos distintos medios ao seu alcance as cartas de servizos co obxecto de que as persoas interesadas coñezan os compromisos e poidan demandar, de ser o caso, o seu cumprimento.

Artigo 7º.-Publicidade da programación anual e plurianual.

1. A Administración xeral da Comunidade Autónoma establecerá programas anuais e plurianuais en que se definirán os obxectivos concretos e as actividades e os medios necesarios para executalos, así como o tempo estimado para a súa consecución.

Estes programas definirán os obxectivos e os prazos fixados polo Consello da Xunta de Galicia e determinarán as persoas ou os órganos responsables da súa execución.

2. Promoveranse fórmulas para que as persoas, individualmente ou por medio das organizacións e asociacións recoñecidas pola lei que as agrupen ou representen, poidan participar no deseño e elaboración destes programas nos termos en que se determine regulamentariamente.

3. O grao de cumprimento dos obxectivos fixados nos programas a que se refiren os puntos anteriores será avaliado periodicamente polos órganos competentes no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma.

4. A páxina web correspondente conterá a información sobre os programas e os seus obxectivos, e as formas de participación previstas no punto 2 deste artigo.

Artigo 8º.-Medios electrónicos, informáticos e telemáticos.

1. A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia impulsará o emprego e a aplicación das técnicas e medios electrónicos e telemáticos para a realización da súa actividade e o exercicio das súas competencias, coas limitacións que para a utilización destes medios establecen a Constitución e as leis.

2. A tramitación dos procedementos administrativos apoiarse na utilización de medios electrónicos, informáticos e telemáticos, respectando as garantías e cumprindo os requisitos previstos para cada caso no ordenamento xurídico.

3. A introdución de medios informáticos e telemáticos na xestión administrativa estará presidida polos principios de eficiencia e racionalidade dos investimentos realizados e axustarse aos criterios establecidos, de ser o caso, pola consellaría competente en materia de tecnoloxías da información na Administración pública.

4. A Comunidade Autónoma de Galicia manterá un rexistro telemático no cal as persoas poderán presentar as súas solicitudes, escritos e comunicacións dirixidos á Administración da Comunidade Autónoma, aos seus organismos autónomos e aos demais entes públicos autonómicos que tramiten procedementos administrativos.

Artigo 9º.-Participación na elaboración de disposicións de carácter xeral.

1. Cada consellaría da Administración autonómica publicará na súa páxina web a relación circunstanciada e motivada dos procedementos de elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral que estean en curso, indicando o seu obxecto e estado de tramitación, así como a posibilidade que teñen as persoas de remitir suxestións e a forma de facelo.

En calquera momento anterior ao trámite de audiencia ou, de ser o caso, ao informe final da secretaría xeral, as persoas, individualmente ou por medio de asociacións que as agrupen ou representen, poderán remitir suxestións relativas a aqueles proxectos que as afecten. As proposicións, suxestións ou recomendacións recibidas serán tidas en conta polo órgano encargado da redacción do texto do proxecto, que poderá asumilas ou rexeitalas a través dun informe final no cal recibirán unha resposta razoada, agás as de recoñecida e notoria urxencia, que poderá ser común para todas aquelas suxestións que formulen cuestións substancialmente iguais.

2. A presentación de propostas non atribúe, por si mesma, a condición de persoa interesada no procedemento.

3. O previsto neste artigo non substitúe o trámite de audiencia pública, nos supostos en que sexa preceptivo de acordo coa normativa de aplicación.

Artigo 10º.-Contratos públicos.

1. Os órganos de contratación das entidades comprendidas no ámbito de aplicación desta lei daralles aos operadores económicos un tratamento igualitario e non-discriminatorio e actuarán con transparencia.

2. Nos procedementos de contratación en que, de conformidade coa normativa de contratos públicos, sexa preceptiva a publicación de anuncios de licitación, o órgano de contratación publicará, con carácter complementario, un anuncio na súa páxina web no cal se indicará o obxecto do contrato, o seu prezo, a referencia do diario oficial en que se publicou o anuncio, a data de remate do prazo de recepción de ofertas ou solicitudes de participación e o lugar onde estas deberán ser presentadas, así como os pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas.

Os órganos de contratación poderán publicar na súa páxina web anuncios relativos a contratos públicos que non estean sometidos a unha publicidade obrigatoria.

3. De conformidade co que regulamentariamente se determine, cada órgano de contratación publicará na súa páxina web, unha vez adjudicado o contrato público, información sobre:

a) Os licitadores.

b) Os criterios de selección e a súa valoración.

c) O cadro comparativo das ofertas económicas.

d) A puntuación obtida por cada oferta, detallando a outorgada para cada un dos criterios de valoración.

e) O resumo da motivación da valoración obtida.

f) O adjudicatario.

g) De ser o caso, as modificacións do contrato adjudicado que supoñan un incremento igual ou superior ao 20 % do prezo inicial do contrato, e este sexa superior a 1.000.000 A.

Non procederá a divulgación da información facilitada polos operadores económicos que estes designasen como confidencial. Esta información inclúe, en particular, os segredos técnicos ou comerciais e os aspectos confidenciais das ofertas. Así mesmo, poderá non publicarse aquela información relativa á adjudicación do contrato no caso de que a súa divulgación constituía un obstáculo para aplicar a lexislación, sexa contraria ao interese público ou prexudique os intereses comerciais lexítimos dos operadores económicos públicos ou privados, ou poida prexudicar a competencia leal entre eles, debendo motivarse a concorrencia destas circunstancias en cada caso.

4. Nos supostos en que se proceda á cesión de contrato ou á subcontratación, daráselles publicidade a estas circunstancias xunto coas razóns que xustifican tal decisión, identificando os cesionarios e subcontratistas e as condicións dos acordos acadados entre o contratista e aqueles, coas excepcións a que se refiren os dous últimos parágrafos do punto anterior.

5. Nos contratos adjudicados por concurso, e salvo as excepcións que poidan establecerse en resolución motivada do órgano de contratación cando a relación entre a calidade e o prezo así o exixa, a ponderación do prezo como criterio de adjudicación do contrato non será inferior ao 40 % da puntuación máxima que poida atribuírse ás ofertas.

Artigo 11º.-Convenios de colaboración.

1. Cada consellaría ou entidade remitirá ao Diario Oficial de Galicia, dentro dos primeiros vinte días dos meses de xaneiro, maio e setembro de cada ano, unha relación dos convenios de colaboración, previstos no artigo 3.1.c) do texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, subscritos no cuadrimestre anterior.

Para os efectos da súa difusión na internet, a consellaría ou entidade fará pública, na súa respectiva páxina web e dentro dos primeiros vinte días dos meses de xaneiro, maio e setembro de cada ano, unha relación dos convenios subscritos referida ao cuadrimestre anterior. A información manterase dispoñible na Internet durante todo o exercicio orzamentario.

Igualmente, manterase dispoñible na Internet a información referida ao exercicio inmediatamente anterior.

Cando os devanditos convenios impliquen obrigas económicas para a Facenda autonómica, sinalaranse con claridade o importe destas, o obxecto do convenio e a persoa ou entidade destinataria da prestación.

2. No expediente administrativo deberá motivarse a utilización da figura do convenio de colaboración previsto no artigo 3.1.d) do texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas e as razóns que impidan a concorrencia da oferta e exclúan a formalización dun contrato administrativo. A motivación publicarase no xeito previsto no parágrafo anterior.

3. Os convenios de colaboración plurianuais e os que impliquen a asunción de obrigas económicas para a Facenda autonómica por importe superior a 150.000 A requirirán a autorización previa do Consello da Xunta de Galicia.

4. O órgano superior competente en materia de rexistro de convenios manterá un rexistro central no cal figuren todos os convenios de colaboración.

O rexistro central poderá contar con seccións, en cada unha das consellarías competentes por razón da materia, para aqueles convenios que polas súas características especiais ou polos seus contidos así o aconsellen. O rexistro central estará vinculado coas súas seccións, que deberán comunicarlle a aquel calquera inscrición ou asentamento que realicen.

A creación das seccións deberá ser acordada polo Consello da Xunta de Galicia.

Artigo 12º.-Concesións de servizos públicos.

1. Os concesionarios de servizos públicos deberán rexerse na súa actuación polo principio de transparencia na xestión.

2. Os pregos de cláusulas administrativas conterán as previsións necesarias para garantir, como mínimo, os seguintes dereitos das persoas usuarias:

1º) A presentar queixas sobre o funcionamento do servizo, que deberán ser contestadas de xeito motivado e individual.

2º) A obter copia selada de todos os documentos que presenten nas oficinas da concesionaria, en relación coa prestación do servizo.

3º) A utilizar, á súa elección, o galego ou o castelán nas súas relacións coa entidade concesionaria e cos seus representantes e traballadores.

4º) A acceder a toda a información que teña no seu poder a concesionaria e sexa precisa para formular queixas ou reclamacións sobre a prestación do servizo. Quedan excluídos os documentos que afecten a intimidade das persoas e os relativos a materias protexidas polo segredo comercial ou industrial, así como, en xeral, aqueles que estean protexidos pola lei.

5º) A exixir da Administración o exercicio das súas facultades de inspección, control e, de ser o caso, sanción para corrixir as irregularidades na prestación do servizo.

6º) A ser tratadas con respecto ao principio de igualdade no uso do servizo, sen que poida existir discriminación nin directa nin indirecta por razóns de sexo.

Artigo 13º.-Actividade de fomento.

1. Por medio dunha lei específica regularase o réxime aplicable ás subvencións establecidas ou xestionadas pola Comunidade Autónoma de Galicia e, en xeral, por todo o sector público galego.

2. A xestión de subvencións e axudas públicas axustarase aos seguintes principios:

-Publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non-discriminación.

-Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Administración outorgante.

-Eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.

3. O rexistro e a publicidade das axudas, subvencións e convenios outorgados pola Comunidade Autónoma someteranse ao disposto na lei orzamentaria correspondente e demais normativa de aplicación.

4. Cada consellaría, organismo ou entidade de dereito público vinculada ou dependente da Administración da comunidade autónoma que realice actividades de fomento mediante o outorgamento de fondos públicos deberá publicar na súa páxina web oficial:

1º) Unha relación actualizada das liñas de axudas ou subvencións que vaian convocarse durante o exercicio orzamentario, con indicación dos importes destinados a elas, o seu obxectivo ou finalidade e a descrición dos posibles beneficiarios.

2º) O texto íntegro da convocatoria das axudas ou subvencións.

3º) As concesións das devanditas axudas ou subvencións, dentro dos cinco días seguintes ao da súa notificación ou publicación, indicando unicamente a relación dos beneficiarios, o importe das axudas e a identificación da normativa reguladora.

5. Enténdense incluídas para os efectos do establecido no parágrafo anterior:

a) As concesións de créditos oficiais por parte da Administración da Comunidade Autónoma, cando se outorguen sen xuros ou con xuros inferiores aos de mercado.

b) As concesións de axudas en que a administración asuma a obriga de lle satisfacer á entidade prestamista todo ou parte dos xuros.

c) As condonacións de créditos.

d) Calquera outro acordo ou resolución dos cales resulte un efecto equivalente á obtención de axudas directas por parte do beneficiario.

e) As achegas en diñeiro realizadas pola Comunidade Autónoma a favor das entidades locais, sempre que non estean destinadas a financiar globalmente actividade de cada ente.

6. Exceptúanse do disposto no parágrafo 4 e poden ser excluídos da publicación:

a) Aqueles supostos en que a publicación dos datos do beneficiario, en razón do obxecto da axuda, sexa contraria ao respecto e á salvagarda da honra e da intimidade persoal e familiar das persoas físicas, en virtude do establecido na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, de protección civil do dereito á honra, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe.

b) Aqueles datos que estean protexidos polo segredo comercial ou industrial.

c) Con carácter xeral, aqueles supostos, ou aqueles datos, en que así o exixan ou aconsellen razóns prevalentes pola existencia dun interese público máis digno de protección, que, en todo caso, deberá motivarse expresamente.

Capítulo III

Membros do Goberno e altos cargos da Administración

Artigo 14º.-Ámbito.

Este capítulo é de aplicación:

- a) Aos membros do Goberno autonómico.
- b) Ás secretarías e secretarios xerais, directoras e directores xerais e cargos asimilados.
- c) Ás delegadas e delegados e representantes do Goberno galego nos entes con personalidade xurídica pública.
- d) Ás presidentas e presidentes, directoras e directores xerais e asimilados dos organismos autónomos.
- e) Ás delegadas e delegados provinciais e territoriais dos departamentos da Xunta de Galicia.
- f) Ao persoal eventual que, en virtude de nomeamento legal, exerza funcións de carácter non-permanente, expresamente cualificadas de confianza e asesoramento especial, nos gabinetes do presidente e dos demais membros do Consello da Xunta de Galicia.
- g) Ás presidentas e presidentes, directoras e directores xerais, directoras e directores executivos, directoras e directores técnicos e titulares doutros postos ou cargos asimilados, calquera que sexa a súa denominación, en entidades de dereito público vinculadas ou dependentes da Administración autonómica, cuxo nomeamento sexa efectuado por decisión do Consello da Xunta de Galicia ou polos seus propios órganos de goberno.
- h) Ás presidentas e presidentes, directoras e directores xerais e asimilados das empresas públicas, sociedades ou fundacións en que a Xunta de Galicia, directa ou indirectamente, participe ou achegue máis do 50% do capital ou do patrimonio, cando tales cargos sexan designados logo de acordo do Consello da Xunta de Galicia ou polos seus propios órganos de goberno.
- i) Ao persoal eventual que, en virtude de nomeamento legal, exerza funcións de carácter non-permanente, expresamente cualificadas de confianza e asesoramento especial das presidentas e presidentes e directoras e directores xerais das entidades relacionadas no artigo 1 desta lei.
- j) Aos titulares de calquera outro posto de traballo da Administración autonómica, calquera que sexa a súa denominación, cuxo nomeamento se efectúe por decisión do Consello da Xunta de Galicia.

Artigo 15. Principios de actuación

1. As persoas comprendidas no ámbito de aplicación establecido no artigo 14 desta lei observarán, no exercicio das súas funcións, o disposto na Constitución, no Estatuto de autonomía de Galicia e no resto do ordenamento xurídico, e promoverán o respecto aos dereitos fundamentais e ás liberdades públicas.
2. Así mesmo, adecuarán a súa actividade aos seguintes principios éticos e de actuación:
 - 1º) Actuarán con transparencia na xestión dos asuntos públicos, favorecendo a accesibilidade e receptividade da Administración a todos os cidadáns.
 - 2º) Observarán un comportamento ético e dirixido á satisfacción do interese xeral.
 - 3º) Respetarán o principio de imparcialidade, de modo que manteñan un criterio independente e alleo a todo interese particular.
 - 4º) No exercicio das súas funcións tratarán de igual xeito a todas as persoas que se atopen en idénticas situacións, sen facer discriminacións.
 - 5º) Promoverán a adopción de medidas de acción positiva para a consecución da igualdade entre mulleres e homes e para a protección dos colectivos desfavorecidos.

- 6º) Realizarán con lealdade e integridade as funcións ou tarefas que teñan asignadas.
- 7º) Usarán normalmente o galego, oralmente e por escrito, nas relacións coa cidadanía.
- 8º) Actuarán de boa fe e coa dilixencia debida no cumprimento das súas obrigas e fomentarán a calidade na prestación de servizos públicos.
- 9º) Exercerán os poderes que lles atribúe a normativa vixente coa finalidade exclusiva para a que lles foron outorgados e evitarán toda acción que poida pór en risco o interese público, o patrimonio das administracións ou a imaxe que debe ter a sociedade respecto dos seus servidores.
- 10º) Serán responsables das accións realizadas no desenvolvemento das súas funcións e garantirán a ausencia de arbitrariedade na adopción das súas decisións. Así mesmo, están obrigados a pór en coñecemento dos órganos competentes calquera actuación irregular da cal teñan coñecemento.
- 11º) Non se implicarán en situacións, actividades ou intereses incompatibles coas súas funcións e absteranse de intervir nos asuntos en que conorra algunha causa que poida afectar a súa obxectividade.
- 12º) Non aceptarán regalos que superen os usos habituais, sociais ou de cortesía, nin favores ou servizos en condicións vantaxosas que poidan condicionar o desenvolvemento das súas funcións.
- 13º) Protexerán e conservarán os recursos públicos e non os utilizarán para actividades que non sexan as autorizadas.
- 14º) Usarán as prerrogativas inherentes aos seus cargos unicamente para o cumprimento das súas funcións e deberes e non se valerán da súa posición na Administración para obterer vantaxes persoais ou materiais.
- 15º) Manterán unha conduta digna, tratando os cidadáns con esmerada corrección.
- 16º) Prestarán especial atención ás necesidades persoais e materiais das persoas discapacitadas, adoptando as medidas necesarias para facilitar o seu acceso á información e as súas relacións coa Administración.
- 17º) Sen prexuízo do disposto nas leis sobre difusión da información de interese público, gardarán a debida reserva respecto dos feitos ou informacións de que teñan coñecemento con motivo ou ocasión do exercicio das súas competencias.
- 18º) Observarán estritamente o réxime de incompatibilidades previstas na lei reguladora e na súa normativa de desenvolvemento.

Artigo 16º.-Información previa ao Parlamento.

1. O Consello da Xunta de Galicia, con carácter previo ao nomeamento da directora ou director xeral da Compañía de Radio-Televisión de Galicia, das presidentas ou presidentes do Tribunal Galego de Defensa da Competencia, do Consello Económico e Social, do Consello da Cultura Galega, ou doutros órganos que poidan establecerse por lei, e cuxo nomeamento sexa realizado polo Consello da Xunta por un período de tempo determinado, porá en coñecemento do Parlamento de Galicia o nome das persoas propostas para estes cargos co fin de que poida dispor a súa comparecencia ante a comisión correspondente da Cámara.
2. A Comisión Parlamentaria examinará, de ser o caso, as candidaturas propostas. Os seus membros formularán as preguntas ou solicitarán as aclaracións que crean convenientes.

Artigo 17º.-Información sobre retribucións.

A páxina web da Xunta de Galicia publicará nominalmente as retribucións públicas percibidas polas persoas a que se refire o artigo 14 desta lei, con expresa indicación dos diferentes conceptos retributivos.

Artigo 18º.-Tratamentos.

O tratamento oficial dos membros do Goberno e dos altos cargos será o de señor/señora, seguido da denominación do cargo, emprego ou rango correspondente.

Disposición adicionais

Primeira.-Modificación do artigo 2 da Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidade de altos cargos.

O artigo 2 da Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidade de altos cargos, queda redactado como segue:

"Artigo 2.-Ámbito de aplicación.

O réxime de incompatibilidades establecido nesta lei será de aplicación aos seguintes cargos públicos:

- a) Aos membros do Goberno autonómico.
- b) Ás secretarías e secretarios xerais, directoras e directores xerais e cargos asimilados.
- c) Ás delegadas e delegados e representantes do Goberno galego nos entes con personalidade xurídica pública.
- d) Ás presidentas e presidentes, directoras e directores xerais e asimilados dos organismos autónomos.
- e) Ás delegadas e delegados provinciais e territoriais dos departamentos da Xunta de Galicia.
- f) Ao persoal eventual que, en virtude de nomeamento legal, exerza funcións de carácter non-permanente, expresamente cualificadas de confianza e asesoramento especial, nos gabinetes do presidente e dos demais membros do Consello da Xunta de Galicia.
- g) Ás presidentas e presidentes, directoras e directores xerais, directoras e directores executivos, directoras e directores técnicos e titulares doutros postos ou cargos asimilados, calquera que sexa a súa denominación, en entidades de dereito público vinculadas ou dependentes da Administración autonómica, cuxo nomeamento sexa efectuado por decisión do Consello da Xunta de Galicia ou polos seus propios órganos de goberno.
- h) Ás presidentas e presidentes, directoras e directores xerais e asimilados das empresas públicas, sociedades ou fundacións en que a Xunta de Galicia, directa ou indirectamente, participe ou achegue máis do 50% do capital ou do patrimonio, cando tales cargos sexan designados logo de acordo do Consello da Xunta de Galicia ou polos seus propios órganos de goberno.
- i) Ao persoal eventual que, en virtude de nomeamento legal, exerza funcións de carácter non-permanente, expresamente cualificadas de confianza e asesoramento especial das presidentas e presidentes e directoras e directores xerais das entidades relacionadas no artigo 1 da Lei de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega.
- j) Aos titulares de calquera outro posto de traballo da Administración autonómica, calquera que sexa a súa denominación, cuxo nomeamento se efectúe por decisión do Consello da Xunta de Galicia".

Segunda.-Modificación do artigo 10 da Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidade de altos cargos.

O artigo 10 da Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidade de altos cargos, queda redactado como segue:

"Artigo 10.-Rexistros.

1. Constitúense o Rexistro de Actividades de Altos Cargos e o Rexistro de Bens Patrimoniais de Altos Cargos da Xunta de Galicia, nos cales se inscribirán as correspondentes declaracións.

2. O Rexistro de Actividades de Altos Cargos será público. O contido das declaracións inscritas nel, pertencentes aos titulares daqueles postos cuxo nomeamento sexa efectuado por decisión do Consello da Xunta de Galicia, publicarase no Diario Oficial de Galicia e estará dispoñible na internet.

3. Do contido do Rexistro de Bens Patrimoniais de Altos Cargos da Xunta de Galicia daráselle conta anualmente ao Parlamento de acordo co que se estableza no Regulamento da Cámara.

Así mesmo, terán acceso a el:

a) Os órganos xudiciais, para a instrución ou resolución de procesos que requiran o coñecemento dos datos que constan no rexistro, de conformidade co disposto nas leis procesuais.

b) O Ministerio Fiscal, cando realice actuacións de investigación no exercicio das súas funcións que requiran o coñecemento dos datos que constan no rexistro.

c) O Defensor del Pueblo e o Valedor do Pobo, nos termos previstos nas súas leis de creación.

4. Non serán obxecto da publicidade prevista no parágrafo precedente as copias da última declaración tributaria correspondente ao imposto sobre a renda das persoas físicas e, se é o caso, do imposto sobre o patrimonio neto recollidas no artigo 8.1.b) da Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidades de altos cargos.

5. O persoal que preste servizos nos rexistros ten o deber permanente de manter en segredo os datos e informacións que coñeza por razón do seu traballo".

Terceira.-As publicacións realizadas nas páxinas web a que se refire esta lei terán carácter meramente informativo e o seu sentido non vinculará a Administración actuante.

En calquera caso, os contidos publicados no Diario Oficial de Galicia terán prevalencia sobre os das referidas páxinas web.

Para os efectos de cómputo de prazos, terase en conta exclusivamente a data de publicación no Diario Oficial de Galicia ou, se é o caso, a data da notificación ou publicación a que se refiren os artigos 58 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Disposicións transitorias

Primeira.-Mentres non se desenvolva regulamentariamente esta lei, permanecerán en vigor, en todo o que non se opoñan a ela:

a) O Decreto 164/2005, do 16 de xuño, polo que se regulan as oficinas de rexistro propias ou concertadas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, se crea o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia e se regula a atención ao cidadán.

b) O Decreto 169/1995, do 16 xuño, polo que se regulan os rexistros de Actividades e Intereses e de Bens de Altos Cargos.

Segunda.-O número 1 do artigo 11 entrará en vigor aos seis meses da publicación desta lei no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira

Primeira.

1. Autorízase a Xunta de Galicia, no marco das súas competencias, para ditar cantas disposicións exixan a aplicación e o desenvolvemento desta lei.

2. No prazo de seis meses, a partir da súa entrada en vigor, a Xunta de Galicia ditará as normas regulamentarias que exixan a aplicación e o desenvolvemento desta lei.

Segunda.-Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, trinta de xuño de dous mil seis.

Emilio Pérez Touriño

Presidente